Modelo: 1

1. **De conformidad con lo establecido en el artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrá de manifiesto a los interesados para que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes en un plazo no inferior a:**

   a) Cinco días ni superior a diez días.
   b) Diez días ni superior a quince días.
   c) Quince días ni superior a veinte días.
   d) Cinco días ni superior a veinte días.

2. **Según lo establecido en el artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que:**

   a) Pueden ser demandadas ante el orden jurisdiccional civil si en la producción del daño concurren con particulares.
   b) Pueden ser demandadas ante el orden social si el daño se produce en el ámbito de una relación laboral pública.
   c) No pueden ser demandadas por dicho motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando cuenten con un seguro de responsabilidad.
   d) Pueden ser demandadas ante el orden jurisdiccional civil cuando la Administración pública tenga contratado un seguro de responsabilidad y la reclamación se dirija también contra la entidad aseguradora.

3. **De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros no serán, con carácter general, susceptibles de recurso de apelación. No obstante, será siempre susceptible de apelación una sentencia recaída en un asunto de cuantía de 25.000 euros, cuando:**

   a) Resuelva un recurso interpuesto frente a una sanción administrativa consistente en una multa.
   b) Declare la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.
   c) Desestime en cuanto al fondo las pretensiones de reconocimiento de una situación jurídica individualizada.
   d) Haya sido dictada tras la celebración de vista oral en un procedimiento abreviado.

4. Conforme al artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado un procedimiento sancionador cuya sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el infractor reconoce su responsabilidad y realiza el pago voluntario antes de dictarse resolución, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones:

a) De un mínimo del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta en conjunto, sin posibilidad de acumulación y condicionadas al reconocimiento de responsabilidad.

b) Del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta por reconocimiento y del 10 % por pago voluntario, siendo acumulables y condicionadas a la renuncia a recursos administrativos.

c) De al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta tanto por el reconocimiento de responsabilidad como por el pago voluntario, acumulables entre sí y condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

d) De al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta por cada supuesto, aplicándose exclusivamente la reducción más favorable y sin condicionamiento respecto de los recursos administrativos.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, será muy grave la infracción que suponga:

a) La interrupción temporal del servicio superior a veinticuatro horas.

b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

c) La existencia de daños materiales en las instalaciones municipales.

d) El uso anormal de un espacio público.

6. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el daño alegado para fundamentar una reclamación de responsabilidad patrimonial deberá:

a) Ser susceptible de valoración económica y atribuible exclusivamente a una persona física determinada.

b) Ser real o potencial, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas.

c) Ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

d) Ser cuantificable y derivado necesariamente de una actuación administrativa contraria al ordenamiento jurídico.

7. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones Públicas en la producción del daño:

a) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, siendo solidaria cuando no sea posible dicha determinación.

b) La responsabilidad será solidaria en todo caso, pudiendo determinarse posteriormente su distribución entre las Administraciones atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.

c) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo exclusivamente a los criterios de competencia e intensidad de la intervención, siendo subsidiaria cuando no sea posible dicha determinación.

d) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención, siendo subsidiaria cuando no sea posible dicha determinación.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquellos:

a) Serán indemnizables siempre que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlos, aunque no se hubiesen podido prever o evitar.

b) No serán indemnizables, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

c) Serán indemnizables cuando deriven del funcionamiento normal de los servicios públicos, quedando excluidos únicamente los derivados del funcionamiento anormal.

d) No serán indemnizables, salvo que el particular acredite la inexistencia de medios científicos o técnicos alternativos para evitar el resultado dañoso.

9. De conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, si una Administración Pública aprueba una oferta de empleo público con 120 plazas comprometidas, el número máximo adicional de plazas que podrán convocarse en los correspondientes procesos selectivos, aplicando el porcentaje adicional previsto en dicho precepto, será de:

a) 126 plazas, al permitirse un incremento adicional de hasta el cinco por ciento sobre las plazas comprometidas.

b) 138 plazas, al permitirse un incremento adicional de hasta el quince por ciento sobre las plazas comprometidas.

c) 132 plazas, al permitirse un incremento adicional de hasta el diez por ciento sobre las plazas comprometidas.

d) 144 plazas, al permitirse un incremento adicional de hasta el veinte por ciento sobre las plazas comprometidas.

10. De conformidad con lo establecido literalmente en el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos:

a) La denominación de las plazas, los requisitos específicos de acceso, el número de efectivos, los sistemas selectivos y las retribuciones básicas.

b) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, las unidades administrativas, los sistemas selectivos y las retribuciones totales.

c) Los puestos, los grupos de clasificación, los cuerpos o escalas correspondientes y las retribuciones básicas y complementarias individualizadas.

d) La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con el nombramiento, cese, funciones y consideración como mérito de la condición de personal eventual:

a) El nombramiento y el cese deberán ser motivados y su condición podrá constituir mérito para la promoción interna.

b) El nombramiento y cese serán libres, sólo realizará funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y su condición no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

c) El nombramiento se realizará mediante concurso, el cese tendrá lugar exclusivamente cuando finalice el mandato de la autoridad y su condición podrá constituir mérito para la promoción interna.

d) Podrá realizar funciones administrativas ordinarias y su condición constituirá mérito para el acceso a la Función Pública.

12. De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando las bases reguladoras de la subvención permiten expresamente la subcontratación, pero no fije el porcentaje que se puede subcontratar, el beneficiario de la subvención podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del:

a) 20 % del importe de la actividad subvencionada.

b) 40 % del importe de la actividad subvencionada.

c) 50 % del importe de la actividad subvencionada.

d) 60 % del importe de la actividad subvencionada.

13. De conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente:

a) Desde la notificación de la resolución de concesión hasta la fecha de inicio del procedimiento de reintegro.

b) Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

c) Desde la finalización del plazo de justificación hasta la fecha en que adquiera firmeza la resolución de reintegro.

d) Desde el requerimiento de devolución hasta la fecha de notificación de la resolución definitiva del procedimiento de reintegro.

14. De conformidad con lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones será de:

a) Seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) Tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

c) Dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

d) Doce mes desde la fecha del acuerdo de iniciación.

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

a) Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público y siempre que una ley les otorgue expresamente el carácter de demaniales.

b) Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos se considerarán bienes patrimoniales, salvo que se produzca su afectación expresa al dominio público.

c) Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

d) Los bienes y derechos de dominio público se regirán preferentemente por las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación.

16. De acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con la prórroga de los contratos del sector público, la prórroga:

a) Deberá acordarse por el órgano de contratación, siendo obligatoria para el contratista cuando se comunique con un mes de antelación.

b) Podrá producirse por consentimiento tácito de las partes cuando el contrato haya sido ejecutado satisfactoriamente.

c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

d) Requerirá acuerdo expreso entre las partes y deberá comunicarse con una antelación mínima de tres meses en todos los supuestos.

17. Según el artículo 36.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, con las excepciones a que se refiere el citado artículo, se perfeccionan:

a) Con la resolución de adjudicación.

b) Con la notificación de la adjudicación al licitador seleccionado.

c) Con la publicación de la adjudicación en el perfil de contratante.

d) Con su formalización.

18. De acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados de dicha disposición se ejercerán por:

a) El alcalde, siempre que el valor estimado del contrato no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto.

b) El Pleno, cuando el valor estimado supere los seis millones de euros, correspondiendo los restantes contratos al Alcalde.

c) La Junta de Gobierno Local, únicamente cuando el contrato tenga una duración inferior a cuatro años, incluidas sus prórrogas.

d) La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares una vez aprobados, cuando no sean modificados por error material, de hecho o aritmético:

a) La modificación del pliego se realizará mediante resolución motivada, manteniendo las actuaciones realizadas y ampliando el plazo de presentación de ofertas.

b) Se modificará el pliego siempre que los licitadores hayan sido informados y ninguno presente oposición expresa.

c) Se mantiene el pliego inicialmente aprobado y se corregirá la condición de solvencia durante la valoración de las ofertas presentadas.

d) La modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

20. De conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con la división en lotes del objeto del contrato:

a) La división en lotes tendrá carácter excepcional y requerirá una justificación expresa basada en razones técnicas o económicas.

b) La división en lotes será obligatoria en todos los contratos, con independencia de la naturaleza y características de su objeto.

c) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente mediante su división en lotes.

d) La división en lotes quedará condicionada a que el valor estimado del contrato supere los umbrales establecidos para la regulación armonizada.

21. La Constitución Española de 1978 regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales en el:

a) Título IV.

b) Título III.

c) Título V.

d) Título VIII.

22. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Española de 1978:

a) El Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

b) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley orgánica para emitir deuda pública o contraer crédito.

c) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados.

d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

23. De acuerdo con el artículo 64.1 de la Constitución Española de 1978, la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por:

a) El Presidente del Congreso.

b) El Consejo de Ministros en funciones.

c) El Presidente del Gobierno.

d) La Diputación Permanente.

24. Según el artículo 73 de la Constitución Española de 1978, las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones:

a) El primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de enero a junio.

b) El primero, de febrero a junio, y el segundo, septiembre a diciembre.

c) El primero, de enero a junio, y el segundo, septiembre a diciembre.

d) El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

25. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional:

a) A los jueces y juezas de paz.

b) A los Tribunales de Instancia.

c) A los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Al Tribunal Constitucional.

26. Respecto al Consejo General del Poder Judicial:

a) En la elección de los Vocales por las Cortes Generales, cada una de las Cámaras garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que entre las diez personas vocales se incluya como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos.

b) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

c) El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cuatro años, contados desde la fecha de su constitución.

d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

27. De acuerdo con el artículo 159.2 de la Constitución Española de 1978:

a) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

b) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

c) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

d) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional.

28. De acuerdo con el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra los acuerdos definitivos de las corporaciones locales por los que se aprueban, derogan o modifican las ordenanzas fiscales:

a) Los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas durante un plazo de 30 días, contados desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

b) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo, desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

c) Sólo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

d) En los municipios sujetos a régimen de gran población, tendrá carácter preceptivo la reclamación económico-administrativa, y contra la resolución de la misma solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

29. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante:

a) Treinta días.

b) Treinta días, como mínimo.

c) Veinte días, como mínimo.

d) Veinte días.

30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no es correcto que:

a) El devengo es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.

b) El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.

c) La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.

d) La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo.

31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no es correcto que:

a) El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.

b) Para las personas físicas, el domicilio fiscal será el lugar donde tengan su residencia habitual.

c) Para las personas jurídicas, el domicilio fiscal será su domicilio social, aun cuando en él no se encuentre centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

d) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo.

32. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con dicha ley y las disposiciones que las desarrollen:

a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

b) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

c) Tasa por derechos de exámenes.

d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

33. De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es un tributo indirecto:

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) El Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

d) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

34. A tenor de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial por:

a) 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

b) 10 días naturales, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

c) 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

d) 15 días naturales, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

35. Según el artículo 164 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de esta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga una participación mayoritaria la entidad local.

b) El presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de esta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

c) El presupuesto de la entidad local, los de sus organismos autónomos y los de las entidades públicas empresariales de ella dependientes.

d) El presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales dependientes de esta, y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga una participación mayoritaria la entidad local.

36. De acuerdo con el artículo 21.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente:

a) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos definitivos, como máximo.

b) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como mínimo.

c) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos definitivos, como mínimo.

d) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo.

37. La fase de ejecución del gasto que se produce cuando existe un acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, es:

a) Retención de créditos.

b) Autorización del gasto.

c) Disposición del gasto.

d) Ordenación del pago.

38. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de:

a) La fiscalización previa y el control financiero, que comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública.

b) La fiscalización previa y el control financiero, que comprende las modalidades de control financiero planificado y la auditoría pública.

c) La función interventora y el control financiero, que comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública.

d) La función interventora y el control financiero, que comprende las modalidades de control financiero planificado y la auditoría pública.

39. Atendiendo al artículo 223.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la fecha límite que tienen las entidades locales para rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio económico anterior, es:

a) Antes del día 15 de mayo de cada año.

b) Antes del día 1 de junio de cada año.

c) Antes del día 15 de octubre de cada año.

d) Antes del día 15 de septiembre de cada año.

40. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, no es un procedimiento de la jurisdicción contable:

a) Expediente sancionador por infracciones en materia de disciplina presupuestaria y gestión de fondos públicos.

b) Expediente de cancelación de fianzas.

c) Juicio de cuentas.

d) Procedimiento de reintegro por alcance.

41. Según el artículo 96.1,c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la sanción disciplinaria de suspensión firme de funciones para funcionarios de carrera podrá tener una duración máxima de:

a) Un año

b) Tres años

c) Seis años

d) Diez años

42. De conformidad con el artículo 48.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de cónyuge o familiar de primer grado es de:

a) Tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta.

b) Cinco días hábiles.

c) Diez días naturales.

d) Dos días hábiles.

43. De conformidad con el artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no constituye una causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

c) La declaración de excedencia voluntaria por interés particular.

d) La jubilación total del funcionario.

44. Según el artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a:

a) La jubilación anticipada forzosa con el 100% de la pensión.

b) La reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determine en su legislación específica.

c) El cobro duplicado de sus trienios y complemento específico.

d) La excedencia obligatoria con reserva de puesto durante 10 años.

45. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:

a) La prohibición exclusiva de la discriminación directa por razón de sexo.

b) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.

c) La aplicación obligatoria de la preferencia de la mujer en todas las contrataciones públicas.

d) La concesión de licencias retribuidas exclusivas para mujeres.

46. Según el artículo 77.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el responsable o encargado del tratamiento de datos de una entidad local cometiese algunas de las infracciones a que se refiere dicha ley, la autoridad de protección de datos que resulte competente:

a) Impondrá una multa pecuniaria de hasta 20 millones de euros.
b) Dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiere cometido.
c) Suspenderá automáticamente las actividades del órgano responsable.
d) Remitirá el expediente al Tribunal Contencioso-Administrativo para fijar la multa.

47. De acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el solicitante de acceso a la información pública:

a) Está obligado en todo caso a fundamentar jurídicamente su pretensión.
b) No está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.
c) Debe aportar informe favorable del Defensor del Pueblo.
d) Debe acreditar un interés directo y legítimo bajo pena de inadmisión.

48. Según el artículo 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, en el plazo de:

a) Quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
b) Un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
c) Tres meses desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
d) Seis meses naturales desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

49. Conforme al artículo 94.1 de la Constitución Española de 1978, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en el caso de:

a) Cualquier tratado o convenio internacional, sin excepción.
b) Tratados de carácter político.
c) Tratados administrativos de mero trámite técnico.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones laborales para la Hacienda Pública.

50. Según el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios públicos están integradas única y exclusivamente por:

a) El sueldo y el complemento de destino.
b) El sueldo y los trienios.
c) El sueldo, los trienios y el complemento específico.
d) Las pagas extraordinarias y el complemento de productividad.

51. Según el artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no produce el cese del Consejo de Gobierno:

a) Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía.
b) La aprobación de una moción de censura.
c) La incapacidad.
d) La aprobación de una proposición no de ley por el Parlamento.

52. De acuerdo con el artículo 125.1 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Presidente de la Junta puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa:

a) Previo acuerdo del Consejo de Gobierno, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta del Parlamento.

b) Previo dictamen favorable de la Mesa del Parlamento, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de la misma las tres quintas partes de la Cámara.

c) Previa deliberación del Consejo de Gobierno, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

d) Previo informe del Consejo Consultivo de Andalucía, entendiéndose otorgada la confianza cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

53. Conforme al artículo 150.2 de la Constitución Española de 1978, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal mediante:

a) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros previo informe del Senado.

b) Ley marco que fije los principios y directrices de la delegación.

c) Ley orgánica que preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros.

d) Convenio de colaboración ratificado por las Cortes Generales.

54. Según el artículo 102 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por:

a) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

b) La Ley 45/2003, de 26 de noviembre.

c) La Ley 47/2005, de 26 de noviembre.

d) La Ley 7/2003, de 26 de noviembre.

55. Según el artículo 61.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes fase de concurso junto a la de oposición:

a) La valoración de méritos podrá suponer hasta el setenta por ciento de la puntuación total del proceso.

b) Solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

c) La fase de méritos será eliminatoria y deberá celebrarse siempre con carácter previo a las pruebas de capacidad.

d) Los méritos se valorarán únicamente a quienes hayan superado el primer ejercicio teórico de la fase de oposición.

56. El artículo 87 1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que serán declarados en situación de servicios especiales, los funcionarios de carrera cuando sean autorizados para realizar una misión en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, por un periodo determinado:

a) Inferior a cinco meses.

b) Superior a tres meses.

c) Inferior a seis meses.

d) Superior a seis meses.

57. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá:

a) A la persona demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

b) A la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

c) Indistintamente, a la persona demandante y a la persona demandada, probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas.

d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

58. A tenor del artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, antes de resolver sobre la admisión a trámite de una reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos podrá remitir la misma al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de:

a) Diez días hábiles.

b) Quince días naturales.

c) Un mes.

d) Dos meses prorrogables.

59. Conforme al artículo 94.2 de la Constitución Española de 1978, respecto de los tratados o convenios que no requieran autorización previa de las Cortes Generales:

a) Deberán ser sometidos a referéndum facultativo antes de su ratificación.

b) El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de su conclusión.

c) Deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado con tres meses de antelación a su entrada en vigor.

d) Requerirán dictamen previo preceptivo del Pleno del Tribunal Constitucional.

60. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal, podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos:

a) A la mitad de los miembros a elegir.

b) Al doble de los miembros a elegir.

c) Al triple de los miembros a elegir.

d) A las 2/3 partes de los miembros a elegir.

61. Conforme a lo preceptuado en el artículo 4.4 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, las competencias encomendadas a las Entidades locales deben ser normalmente:

a) Plenas y completas, sin que puedan ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central y regional, más que dentro del ámbito de la Ley.

b) Plenas y Completas sin que exista posibilidad alguna de limitación por parte de la autoridad central ni siquiera mediante ley.

c) Plenas y Completas pero sí podrán ser cuestionadas y limitadas por la autoridad regional a la que pertenezcan ya que dentro de la Organización territorial se encuentran en un nivel inferior.

d) Plenas pero no completas ya que la autoridad estatal y la regional serán competentes para desarrollar y por tanto completar el ejercicio y desarrollo de dichas competencias.

62. Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su calidad de Administración pública de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:

a) Las potestades tributaria y financiera.

b) Las potestades tributaria y financiera sólo corresponden a las provincias

c) Las potestades tributaria y financiera no son una competencia local.

d) La potestad tributaria y financiera es competencia exclusiva del Estado.

63. Según lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales requerirán:

a) En todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

b) En todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado solamente.

c) Sólo será necesario informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

d) Las respuestas a),b) y c) son incorrectas.

64. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la inscripción de un extranjero en el padrón municipal:

a) Es una prueba de su residencia legal en España.

b) Le corresponden derechos que no les confiere la legislación vigente.

c) En todo caso le corresponden los mismos derechos que a todos los ciudadanos españoles y especialmente como vecino del municipio en el que está empadronado.

d) No constituye prueba de su residencia legal en España.

65. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones:

a) Sólo existe en los municipios señalados en el título X de la LBRL.

b) Existe, en todo caso, en los municipios señalados en el título X de la LBRL.

c) Existe además en aquellos otros municipios en los que así lo acuerde el Pleno con el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus miembros.

d) Existe en todos los municipios de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116 de la citada LBRL.

66. Conforme al artículo 22.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2019, la constitución de los grupos municipales se formalizará mediante escrito dirigido a la Alcaldía suscrito por todos sus componentes:

a) Dentro de los 5 días siguientes a la constitución del Pleno .

b) Dentro de un mes como máximo tras la constitución del Pleno.

c) Dentro de los 10 días siguientes a la constitución del Pleno

d) Dentro de los 3 días siguientes a la constitución del Pleno.

67. Conforme al artículo 41.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2019, las sesiones del Pleno que se celebran de forma periódica y preestablecida, son sesiones:

a) Ordinarias.

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias y urgentes.

d) Extraordinarias y especiales.

68. Según el artículo 128.1,a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2019, el Alcalde o Alcaldesa podrá plantear al pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación del siguiente asunto:

a) Cualquier Reglamento.

b) Los presupuestos anuales.

c) El nombramiento de cualquier Concejal que no reúna los requisitos para serlo.

d) Aquellas normas que tengan carácter sancionador.

69. Es un organismo autónomo local del Ayuntamiento de Sevilla:

a) El Instituto del Taxi.

b) La Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad de Sevilla.

c) El Instituto Municipal de Deportes.

d) El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla.

70. Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) La supresión de los organismos autónomos locales corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

b) Los organismos autónomos locales deberán quedar adscritos a una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local.

c) Las entidades públicas empresariales sólo podrán estar adscritas a un organismo autónomo local.

d) No podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir otros entes de distinta naturaleza.

71. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2,i) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

b) Control de mercancías peligrosas que circulen por vías cercanas al municipio.

c) Control de tráfico en las vías que estén cerca del municipio aunque no sean interurbanas.

d) Comercio y desarrollo de espectáculos público y actividades lúdicas.

72. Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómicas y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas.

a) Ejercer sus competencias propias pero si la Administración General del Estado entiende necesario invadir competencias de una u otra Administración, por el interés general, podrá hacerlo justificando las razones.

b) Tener en cuenta que para la efectiva coordinación y la eficacia está justificado que la administración autonómica pueda asumir las competencias de los municipios que formen parte de ella pero no pueden asumir las consecuencias que se deriven de esa asunción.

c) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las competencias propias.

d) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias propias pero no se pueden asumir las consecuencias que se deriven para las básicas ya que cada administración debe asumir sólo las suyas.

73. Según lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las mancomunidades se rigen por:

a) La normativa de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

b) La legislación básica estatal.

c) Un reglamento que especifique sólo el ámbito territorial de actuación de la entidad.

d) Sus estatutos propios.

74. Según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos través de los siguientes medios:

a) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.
b) Sometimiento a control previo al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
c) Sometimiento a comunicación o declaración jurada.
d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

75. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entenderá por declaración responsable:

a) El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, entre otros, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho.
b) Mecanismo de comunicación por parte del ciudadano de que va a realizar una obra pero que no permite el inicio inmediato hasta que no recaiga resolución expresa.
c) Comunicación por el ciudadano de que se ha iniciado una actividad económica a los solos efectos de que la Administración tenga conocimiento.
d) Documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública datos relevantes para iniciar una actividad.

76. Conforme dispone el artículo 30 del Reglamento de Servicio de la Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, las Corporaciones locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia,

a) Sólo en el orden personal conforme a su normativa específica.
b) Sólo en el orden económico sin más limite que el presupuestario.
c) Tanto en el orden personal como en el económico con arreglo a la ley de régimen local y a sus reglamentos y demás disposiciones de aplicación.
d) Tanto en el orden personal como en el económico pero teniendo en cuenta todos los acuerdos firmados con otras administraciones que le puedan afectar.

77. Conforme dispone el artículo 69.1 del Reglamento de Servicio de la Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, los servicios que impliquen ejercicio de autoridad:

a) Necesariamente tendrán que ser atendidos independientemente de que se hagan por gestión directa o indirecta.
b) Serán atendidos necesariamente por gestión directa sin órgano especial
c) Serán atendidos necesariamente por gestión directa con órgano especial
d) Serán atendidos necesariamente por gestión directa con la intervención de un órgano específico revestido de autoridad.

78. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, son de titularidad de las entidades locales:

a) Los edificios públicos destinados a centros de educación infantil de segundo ciclo.
b) Los edificios destinados a educación secundaria.
c) Los edificios públicos destinados a educación superior.
d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

79. Según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el régimen del Concejo Abierto el gobierno y administración municipales corresponden:

a) A un alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores.
b) A los órganos excepcionales que determine la Ordenanza especifica de cada municipio que lo prevea.
c) A un Concejo de vecinos residentes en el municipio.
d) A los municipios de población muy pequeña.

80. Según lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, teniendo las certificaciones que se expidan de los datos que contiene el carácter de:

a) Documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

b) Documento público pero no para todos los efectos administrativos.

c) Documento privado pero oficial para todo tipo de efectos.

d) Documento administrativo sólo válido para interponer reclamaciones como vecino del municipio.

81. Conforme al tenor literal de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos colegiados:

a) Aquellos que se creen reglamentariamente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones ejecutivas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

b) Aquellos que se creen mediante ley y estén integrados por cinco o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

c) Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

d) Aquellos que se creen formalmente y estén integrados por cinco o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

82. De acuerdo con el principio de legalidad recogido en el artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida:

a) Únicamente por una ley orgánica.

b) Por una norma reglamentaria.

c) Sólo a través de disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada.

d) Por una norma con rango de ley.

83. En relación a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, y según el tenor literal de lo recogido en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción considerará especialmente el siguiente criterio:

a) La intensidad de la perturbación causada al interés público.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) El grado de deterioro causado en el servicio o espacio público.

d) El grado de participación en el hecho causante de la sanción.

84. Conforme a lo recogido en el artículo 17.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan:

a) Todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

b) La mitad de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia por unanimidad

c) El Presidente y la mitad de miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia por mayoría absoluta.

d) La mayoría de los miembros del órgano colegiado, incluidos el Presidente y Secretario, y sea declarada la urgencia por unanimidad.

85. De acuerdo con el artículo 35.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que se separen de instrucciones dadas por órganos administrativos superiores jerárquicamente.

b) Los acuerdos de acumulación, conversión y conservación de actos y trámites administrativos.

c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

d) Los actos que acuerden el desistimiento en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, así como la renuncia a continuarlo.

86. Según lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son actos nulos de pleno derecho:

a) Los que sean constitutivos de una infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
b) Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.
c) Los dictados por un órgano que sea manifiestamente incompetente por razón de la materia.
d) Los que contengan errores materiales que determinen la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento administrativo.

87. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas:

a) Implicará la nulidad de pleno derecho del acto.
b) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo acuerde motivadamente el órgano instructor del procedimiento.
c) Implicará en todo caso la anulabilidad del acto y será necesaria su convalidación.
d) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

88. Conforme a lo regulado en el artículo 108 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad:

a) Suspenderá la ejecución del acto, hasta que no se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio.
b) Podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
c) Podrá suspender la ejecución del acto, sólo cuando ésta sea contraria al ordenamiento jurídico o al interés general.
d) Suspenderá en todo caso la ejecución del acto, cuando así lo imponga una orden jurisdiccional.

89. Conforme a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo para resolver y notificar la resolución se suspenderá en el siguiente caso:

a) Cuando deba realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

90. Según lo recogido en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento:

a) El órgano instructor dictará resolución cuando los hechos resulten acreditados.
b) El órgano instructor elevará un informe vinculante al órgano encargado de dictar la resolución.
c) El órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados.
d) El órgano instructor podrá acordar motivadamente la apertura de un plazo para la realización de actuaciones complementarias.

91. De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y notificarla:

a) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de seis meses, salvo que una norma legal o reglamentaria establezca uno mayor.

b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para resolver se contará desde la fecha del acuerdo de incoación dictado por el órgano competente para resolverlo.

c) Se exceptúan de la obligación de resolver los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

d) El incumplimiento de la obligación de resolver dará lugar a la exigencia de una indemnización por parte del interesado, cuando cause daños y perjuicios a sus bienes y derechos.

92. Según lo regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas, salvo los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses.

b) Las entidades sin personalidad jurídica únicamente en aquellos supuestos en los que así venga determinado por las normas del procedimiento.

c) Las personas jurídicas sólo en aquellos casos en los que la Administración establezca la obligación de relacionarse con ella a través de medios electrónicos.

d) Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.

93. De conformidad con el tenor literal del artículo 12.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma:

a) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesario su publicación.

b) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesario su publicación.

c) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesario su publicación.

d) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesario su publicación.

94. Según lo estipulado en el artículo 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

a) Será preceptivo el informe del Ministerio de Justicia que será evacuado en el plazo máximo de tres meses.

b) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.

c) Será facultativo el informe del Ministerio de Justicia que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.

d) Será preceptivo el informe del Ministerio Fiscal que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.

95. A tenor de lo regulado en el artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los supuestos en los que un procedimiento iniciado de oficio se hubiere paralizado por causa imputable al interesado:

a) Se producirá la caducidad del procedimiento una vez transcurrido tres meses.

b) Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

c) Se acordará de forma motivada la continuación de la tramitación del procedimiento una vez transcurrido tres meses.

d) Se continuará con la tramitación del procedimiento sin ser tenidas en cuenta las alegaciones aducidas por el interesado.

96. Según lo dispuesto en el artículo 5.3,b) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el siguiente requisito:

a) La dotación de los medios personales necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

b) La aprobación previa de sus propios Estatutos de organización y funcionamiento.

c) El nombramiento de sus órganos directivos y determinación de su estructura jerárquica.

d) Delimitación de sus funciones y competencias.

97. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia por la cual se reducirán a la mitad:

a) Todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

b) Los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

c) Sólo aquellos plazos que no hubieran vencido.

d) Todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo el relativo a la obligación de dictar resolución expresa y a notificarla.

98. Según el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad:

a) Se producirá la convalidación del acto anulable.

b) Se producirá la caducidad del procedimiento.

c) Se acordará la terminación del procedimiento por desistimiento de la Administración.

d) Se podrá impugnar directamente el acto ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

99. De conformidad con el tenor literal del artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente se fijará mediante:

a) Un procedimiento complementario que deberá ser tramitado de forma simplificada.

b) Un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.

c) Un procedimiento complementario, cuya resolución deberá ser dictada en el plazo máximo de un mes.

d) Un procedimiento complementario, que tendrá que resolverse mediante pacto, acuerdo o convenio.

100. Según lo recogido en el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la eficacia de un acto administrativo quedará demorada:

a) Cuando su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Cuando así lo determine como medida cautelar un órgano jurisdiccional.

c) Cuando el acto no sea firme y se interponga un recurso en vía administrativa.

d) Cuando así lo exija el contenido del acto.